

morena

Gaceta de difusión de Formación Política No. 4, 2022. Primera Edición
Publicación trimestral del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guerrero

02

No,
esa democracia no

03

El liderazgo democrático
y participativo

12

Liderazgo indígena
para la democracia



Pueblos indígenas

DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES

08

Jacinto González Varona
Presidente

Yesenia Salgado Xinol
Secretaria General

Jonathan Márquez Aguilar
Secretario
de Organización

Ana Lilia Botello Figueroa
Secretaria de Finanzas

Celeste Mora Eguiluz
Secretaria
de Formación Política

**Emmanuel
Gutiérrez Andraca**
Secretario de
Comunicación

Abel Bruno Arriaga
Secretario
de Pueblos Indígenas

Maribel Santiago Arellanes
Secretaria de Mujeres

www.holagalea.com

Publicación impresa trimestral
para el Comité Ejecutivo Estatal
de MORENA en Guerrero.

No. 4, 2022. Primera Edición



**Diseñado
y producido
por Galea S.C.,
MARCA REGISTRADA**

contacto@holagalea.com

Tonalá 149. Oficina 304.

Col. Roma Norte, Alcaldía

Cuauhtémoc, C.P. 06700,

Ciudad de México. Se terminó

de imprimir el 21 de noviembre
de 2022, con un tiraje de 8,000
ejemplares.

Las imágenes usadas por Galea
S.C. tienen como finalidad un
uso cultural, de capacitación
y formación social, sin fines
de lucro. Son obtenidas de
diversos bancos de imágenes y
sitios de internet. Se acredita
en cada foto el sitio de origen.
Galea S.C se hace responsable
del uso del material gráfico.

EDI TO RIAL

NO, ESA DEMOCRACIA NO

Los hombres y mujeres que conforman los pueblos originarios saben que es necesaria la equidad para mejorar las condiciones de vida de todos. Es a través de la educación, la organización y la participación que conocen, difunden y defienden sus derechos, la herencia cultural de los abuelos y abuelas narrada en sus telares, la resistencia de la memoria y el resguardo del territorio y los recursos naturales, que la verdadera democracia estará más cercana.

Sin embargo, históricamente, se ha ignorado la cosmovisión de los pueblos indígenas al formar cuadros militantes dentro de los territorios demarcados por la autoridad institucional, aprovechando los procesos electorales como una estrategia de división comunitaria, la imposición de cacicazgos y costos de poder, condicionando la intervención de los poderes locales para ejecutar obra pública a cambio de recursos, prácticas clientelares y otras.

Esto ha enrarecido el ambiente, aumentando la hostilidad, las prácticas de intimidación y amenazas a quienes se oponen a las prácticas de quienes detentan el poder político. Muchos de los representantes que obtienen el voto popular explotan sus cargos para uso familiar, clientelar y de enriquecimiento ilícito, explotando los bienes comunes de la gente de la región, lo que supone una lógica resistencia y oposición de las comunidades indígenas a la entrada de partidos políticos nuevos, plataformas o sistemas diferentes a los de su gobierno y rechazo a todo lo que suene a "ese tipo de democracia".

Así, hoy las mujeres también asisten a las reuniones comunitarias porque los hombres andan en el monte, defendiendo caminos o en la protesta contra el despojo. Su defensa del agua es el cimiento de la soberanía alimentaria, tema de absoluto interés en la construcción de la democracia. Hoy son las redes de apoyo, los lazos y vínculos sororos, la identificación de pares y de experiencias compartidas, lo que está abriéndole paso a los liderazgos femeninos.

POR ALMA SOTO ZÁRRAGA

Gilberto Coria Director Editorial • **Omar Castillo** Coordinador Gráfico
Aidee Moreno, Guillermo Rojas, Daniel Razo, Karla Araujo y Sagrario Ávila Colaboradores

Fuente: www.gob.mx

EL LIDERAZGO DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El poder colectivo
y cómo sirve para mejorar
su representatividad

POR ALMA SOTO ZÁRRAGA

Un pueblo democrático es educado, organizado, conoce y defiende sus derechos, pero la democracia no está completa sin una participación igualitaria y equitativa de todos sus ciudadanos.

En México, la exclusión ha ocurrido sistémicamente debido a la raza, etnia, idioma, filiación política, ideología y género, donde los indígenas han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, los pueblos originarios han podido brindar una enseñanza de que otros mundos son posibles mientras consolidan su fuerza y formación como una clase política.

OTRO MUNDO ES POSIBLE...

En la mayoría de los movimientos sociales, pero particularmente en el caso de las luchas campesinas indígenas, las demandas materiales (tierra) y de identidad (cultura) son inseparables. (Bartra, 2008).

Y es por ello que uno de los primeros planteamientos que formulan los pueblos indígenas al sistema político del Estado-Nación ha sido la rígida homogeneización que se pretendió imponer durante mucho tiempo desde el tratamiento de los poderes civiles a la autoridad, autonomía, normatividad y formas de organización, así como los usos y costumbres de cada uno de los pueblos autóctonos.

Dicha homogeneidad étnica y cultural de la Nación parte de una idea de filia al mestizaje, y pretende asimilar e integrar a todos como "mexicanos",

pero esta etiqueta se convierte en un estándar que no diferencia ni distingue las características, ideología y concepción cultural y social interna de cada grupo étnico, sino que lo difumina en aras de unificación identitaria, siendo ese el mismo proceso de exclusión de elementos culturales originarios que inició con la Conquista española y no termina.

Con la construcción de un poder colectivo acuñado en el gobierno comunitario y la autodeterminación, los pueblos han organizado no sólo una resistencia a esa erradicación o generalización de identidad, sino una resignificación de la representación que se tiene de ellos, de su idioma, sus costumbres y su cosmovisión, para enfrentarse al estereotipo excluyente que el propio País había estado acuñando durante toda la época moderna contra todo lo indígena.

Sin embargo, al interior de cada nación originaria, fluyen también los liderazgos, los choques de poderes, el reconocimiento y surgimiento de potencias que pretenden ser sometidas o erradicadas y finalmente se consolidan como fuerza interna, no sólo desde lo ancestral sino desde lo actual.

DE LA AUSENCIA AL PODER Y AL LIDERAZGO

IncurSIONAR en el espacio público, aquel donde se discuten y deciden los asuntos de interés común, donde se construye la ciudadanía mediante muy diversas

formas de participación social y donde se ejercen los derechos políticos, no es cosa fácil para los indígenas en general, debido a la realidad clasista, racista y excluyente que ha prevalecido a lo largo de décadas.

Hay también un sesgo de género que hace que esto sea mucho menos sencillo para las mujeres indígenas en particular, que históricamente han vivido una relación política asimétrica pues su presencia y participación constituyó, durante mucho tiempo, una transgresión al orden simbólico y a la organización social de los géneros; dado que los conceptos de masculinidad y feminidad tenían muy marcados estereotipos en los espacios que culturalmente se asignaban a varones y mujeres.



Fuente: www.larevista.com.mx



Fuente: www.gob.mx

Esa ha sido una de las primeras características dignas de destacar del poder colectivo en las naciones originarias de México y del estado de Guerrero, donde estas fuerzas internas tradicionalistas hoy día se reorganizan y reconocen mutuamente, se cuestionan y reinventan prácticas y jerarquías para reestructurar esa fuerza a conveniencia de todos sus integrantes de cara al Estado-Nación.

Por lo general, el liderazgo comunitario indígena era masculino, y aparecía en contextos locales, legitimándose en las asambleas comunitarias y caracterizado por no ser autoritario pero sí patriarcal, por representar y defender a la comunidad y a proyectos, pero con tradiciones muy arraigadas.

SOMOS PALABRA DE AGUA

Dentro y fuera del mundo indígena la dignidad y humildad del líder masculino, que se supedita al mandato colectivo, es aplaudida y reconocida porque ha reivindicado su presencia en la construcción de un país desde la aparición de "la dignidad rebelde" del levantamiento zapatista de Chiapas en 1994, que es un caso emblemático del discurso-activismo: "Nunca más un México sin nosotros".

En ese mismo sentido, al interior de las comunidades amuzgas, tlapanecas, mixtecas y nahuas en Guerrero se han gestado movimientos de resistencia campesinos, territoriales, de recuperación de identidades étnicas, de posicionamiento en defensa de los

ríos, arroyos y manantiales, así como de contacto y aprendizaje de otros movimientos, donde las mujeres indígenas siempre han estado presentes.

En su organización han existido expresiones de resistencia, a la privatización de recursos naturales, a la militarización, a temas educativos o magisteriales, siendo combativas pero también artísticas, creativas y hasta artesanales, en las que está presente la memoria, la historia, el diálogo con los saberes ancestrales pero desde la actual resistencia y el liderazgo de las mujeres indígenas, quienes libran también una batalla para lograr obtener visibilidad, reconocimiento y respeto a su voz y voto, ante su propia comunidad y ante el Estado.

Así, hombres y mujeres resguardan, resignifican, narran y cuentan la historia del espacio que habitan y de la relación que se desarrolla con su territorio y sus elementos, la gobernanza basada en normas y principios comunitarios, por lo que esta visión espiritual y de respeto, se ve confrontada por el concepto de democracia entendida desde el punto de vista del Estado, donde a veces el "progreso" que imponen las obras extractivistas o desarrollistas son amenaza a la cosmogonía o convivencia armónica con el lugar y el estilo de vida que los pueblos procuran.

Y es que, si bien en las leyes se les da reconocimiento de la custodia y defensa del territorio que habitan, siempre existe la amenaza latente del saqueo y despojo, que se emprende sin consultar a la asamblea para obtener el permiso y consentimiento de los ejidatarios, pasando por encima de los derechos colectivos a la tierra y el territorio, la consulta y consentimiento previo, libre e informado, y la libre determinación (Herrera, 2022).

Las etnias indígenas salen por fin de la interacción subordinada a la que las sometían grupos y clases dirigentes para obtener su propia voz, representatividad, discurso, narrativa y plan de acción, pero la plataforma política que enarbola, con frecuencia ha sido para los partidos políticos una bandera falsa que genera clientelismo y división.

PODER FEMENINO

En la construcción de liderazgos, no sólo los hombres indígenas han mostrado su capacidad organizativa y de dirección, las mujeres también han roto esa barrera no sólo hacia afuera, en el espacio público político, sino incluso en sus propias comunidades, luchando contra los mecanismos de exclusión que se inculcan como tradiciones, lo que representa una búsqueda de la verdadera democracia.

Para ser lideresas en sus regiones de origen, las mujeres llegan –no sin críticas y oposición social– a ejercer alguna función de autoridad en sus sistemas de cargos originarios, o tal vez a ser

docentes o promotoras educativas, culturales, o de los de derechos humanos y la defensa de los recursos naturales.

Las mujeres indígenas han sido punta de lanza en la transformación interna de sus comunidades, cuestionando y modificando tradiciones sociales, religiosas y culturales que les resultaban excluyentes y opresivas, con mandatos de género y de mucha violencia, tales como la obediencia silenciosa al marido, la conformidad ante la violencia física o económica, y asumir una condición de indefensión o de ser desposeídas de patrimonio, así como la nula participación en la toma de decisiones o su exclusión de lo público para mantenerse en lo privado y lo doméstico.

Su incidencia en el campo público también lleva semilla de paz, para fungir de intermediarias en conflictos, resolver disputas o promover la nego-

ciación. Sin embargo, para ellas, ni el derecho positivo ni el consuetudinario garantizan igualdad ni ejercicio de sus derechos ciudadanos, por lo que han tejido una revolución dentro del propio movimiento de irrupción que representa lo indígena en el ámbito público nacional, de auto reconocimiento, de auto representación, y de acción, como sujetas colectivas y en cotidiana lucha contra la cultura sexista que las atraviesa desde lo local y lo global.

Así, las redes de organización indígenas se han diferenciado también por el género, dando lugar a agrupaciones como la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas (CGMI), cuyos antecedentes datan de 1997, aunque su constitución formal ocurre hasta 2003, (Espinosa, 2009) donde se persigue el reconocimiento de su participación en todos los movimientos indígenas.

intimidación y presencia militar en sus comunidades.

Y es que, en un Estado con fuertes y arraigados poderes caciquiles como Guerrero, las acciones fuera del estado de derecho en contra de toda la población son comunes, pero la violencia contra las mujeres es para amedrentar a potenciales luchadoras sociales; que pueden ser violadas, desaparecidas o asesinadas sin que las autoridades locales hagan justicia.

Las mujeres luchan así en una ruta desigual por alcanzar los liderazgos: los hombres ya pueden acceder sin demasiado problema al reconocimiento social, político, a los cargos de representación, a la interlocución con autoridades, y tienen normalmente trato con varones que no son familiares, así como movilidad física y recursos propios, pero ellas no. Nivelar ese piso ha sido también una de las grandes victorias diarias de las agrupaciones indígenas femeninas.

Fuente: www.congresonacionalindigena.org

Fuente: www.gob.mx

Tanto en la organización, como acuerpando y materializando la lucha, y donde uno de los ejes discursivos y de su acción política es la lucha contra la violencia y en favor de los derechos indígenas, humanos y de las mujeres.

Destaca también la Cooperativa Ljaa' Tejedoras de Esperanzas, de mujeres Ñomndaa, o de mujeres de lengua amuzgo, al suroeste del Estado de Guerrero. En ella se da el fenómeno de las agrupaciones o colectivos y cooperativas de artesanas, una de las pocas actividades remuneradas a la que es posible acceder sin prejuicios de género, para terminar también con la violencia doméstica, económica, patrimonial y de libertad de pensamiento, de creatividad y hasta de organización colectiva, en ocasiones hasta ejercida por el propio Estado, a partir del desprestigio, la represión o persecución política mediante

BIBLIOGRAFÍA:

•Bartra, Armando; Otero, Gerardo. Movimientos indígenas campesinos en México: la lucha por la tierra, la autonomía y la democracia. En publicación: Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América Latina. Sam Moyo y Paris Yeros [coord.]. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 2008. ISBN 978-987-1183-85-2 Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/sursur/moyo/18BarOt.pdf>

•Espinosa Damián, Gisela. (2009). Liderazgo y violencia de género en el guerrero indígena. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 14(32), 211-223. Recuperado el 25 de octubre de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100015&lng=es&tlang=es.

•García Bravo, A. B. & Parra Vázquez, M. R. (2019). El liderazgo "mandar obedeciendo" se fundamenta en el sacrificio del hermano mayor. LiminaR Estudios Sociales Y Humanísticos, 18(1), 97-111. Recuperado el 25 de octubre de 2022 de <https://doi.org/10.29043/liminar.v18i1.726>

•Herrera, Edith, (2002) Suljaa': Tejiendo el río, Desinformémonos, periodismo de abajo. Recuperado el 26 de octubre de 22 de <https://desinformemonos.org/suljaa-tejiendo-el-rio/>

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES

EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

POR SAGRARIO ÁVILA

Históricamente nuestras raíces y costumbres ancestrales han resistido diversas circunstancias que ha intentado desaparecer precisamente lo que hasta hoy nos sigue dando identidad y dignidad: nuestras comunidades indígenas.

En el artículo segundo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los pueblos indígenas deben ser respetados en su derecho a elegir a sus propios representantes de acuerdo a sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos, para ejercer sus derechos político-electorales.

Como es de dominio público, los orígenes de nuestra Nación devienen del medio rural, por tal motivo es importante conocer y entender qué son y cómo funcionan los derechos político-electorales en las comunidades indígenas.

A nuestros indígenas les caracteriza el enorme bagaje cultural que en algunos casos data de miles de años de antigüedad, la diversidad lingüística

que en su haber cuenta con más de 68 diferentes lenguas que reúnen 364 variantes, la pertenencia al lugar de donde son originarios, la defensa de la tierra, pero sobre todo la forma de organizar el gobierno, la sociedad y el cómo eligen a sus gobernantes, esto hace que nuestros pueblos tengan características únicas que los hacen el fundamento de lo que hoy en México se denomina "Democracia Participativa".

Dentro de nuestro máximo ordenamiento jurídico se reconoce esta organización, la cual descansa en nuestros pueblos indígenas definiéndolos como: "La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del País al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas".¹

Es así, que estas formas únicas de organización se denominan: "Usos y Costumbres" y/o "Sistemas Normativos Internos", y no son otra cosa que las disposiciones que los pueblos indígenas aplican y observan dentro de sus comunidades las cuales son el resultado de los sistemas normativos tradicionales (jurídicos, políticos, religiosos, parentales, etcétera) mantenidos a través de generaciones.

En México se reconoce la presencia de un pluralismo jurídico formal, lo que se traduce en que los sistemas jurídicos y de representación indígenas son válidos e iguales a cualquier otro, así como sus autoridades y resoluciones. Independientemente de que coincidan o no con las autoridades y el conjunto de las resoluciones del sistema jurídico oficial.²

¹ Artículo 2, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM.

² Líneas Jurisprudenciales/ Derecho Político Electoral Indígena/ Rosalía Bustillos/TEPJF

Llegados a este punto, resulta lógico que el Derecho Indígena se defina como: el conjunto de normas jurídicas vigentes en una comunidad, en donde el derecho forma parte de los usos y costumbres de un pueblo, dando cómo resultado todo un sistema constituido por una manera específica en cuanto a la forma de hacer gobierno, de elegir a sus autoridades, de implementar las normas jurídicas, procedimientos y formas de sanción.

En el contexto, cabe la afirmación de que en nuestro País hay tantos derechos indígenas como pueblos y comunidades, ya que, el derecho indígena como sistema jurídico propio en las comunidades más aledañas, se caracteriza por sus propios contextos culturales. (González y Martínez 2002, 447)

Algunas características de este derecho son:

1. Su fuente principal es la costumbre.
2. Es un derecho generalmente oral.
3. Está basado en la forma distinta en

que cada grupo o persona entiende y explica el mundo, y que para ello crea valores, actitudes y creencias que los determinan.

Por estas razones, el derecho indígena surge como un producto cultural, para proteger sus valores y su existencia de las sociedades modernas, son sujetos de derecho con características y personalidad propia, con las consecuencias jurídicas que de ellas derivan: derecho a poseer un territorio, a conservar su identidad, a ser tratados de manera igual a todos los ciudadanos del país al que pertenecen, a elegir a sus representantes, a la libre determinación, a una lengua, entre otros (López 1998, 39).

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevén los derechos políticos que tienen todos los ciudadanos mexicanos: votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Además de los derechos fundamentales vinculados con estos, como la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de información, la libertad de prensa y el derecho de reunión.³

De acuerdo a la Constitución, el derecho político-electoral indígena va de la mano con la autonomía de los pue-

EL DERECHO INDÍGENA SURGE COMO UN PRODUCTO CULTURAL, PARA PROTEGER SUS VALORES Y SU EXISTENCIA DE LAS SOCIEDADES MODERNAS.



Fuente: www.gob.mx



Fuente: www.gob.mx

blos para nombrar a sus propias autoridades, a ser votados, a elegir su propio sistema de gobierno, así como a ejercer algún cargo dentro de sus instituciones políticas. Así mismo, en ejercicio de sus derechos políticos, por formar parte del Estado Mexicano, pueden participar y ser representantes en las elecciones a cargos populares con base a la legislación electoral vigente (González 2002, 274).

Los derechos político-electorales indígenas (DPEI) son:

El derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización [...] política.⁴

El derecho a elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.⁵

Dentro de las principales diferencias en cuanto a la aplicación y ejercicio de los DPEI en contraste con los derechos político-electorales del resto de los mexicanos, es que particularmente el voto constitucionalmente establecido es: di-

recto, secreto, individual y libre, pero en los Derechos Político Electorales Indígenas generalmente, se ejercen con base en sus usos y costumbres, por lo tanto, en varios de los casos no cumplen con los principios del voto constitucional.

A diferencia del sistema de partidos políticos, en la práctica nuestros pueblos y comunidades indígenas ocupan formas únicas de aplicar los derechos políticos a sus integrantes, caracterizándose primordialmente por ser una institución jerárquica cívico-religiosa, manteniendo como la base social el servicio comunitario que se ajusta al modelo jerárquico de funciones, oficios o "cargos", ya sean políticos o ceremoniales. Los hombres que logran a lo largo de su vida obtener todos los cargos y niveles de la jerarquía son los que se convierten en los ancianos o "los principales de la comunidad", y su opinión es determinante en la designación de las personas al frente de los órganos de gobierno indígena y en los propios del municipio. En esta realidad social y política, la designación de las autoridades locales se realiza sin la intervención directa de los partidos políticos ya que la elección de los cargos es pública y se hace en las asambleas donde se reúne a un número variable de ciudadanos que adquirieron derecho a participar por haber cumplido con su servicio comunitario.

Cabe recalcar que es indispensable un acuerdo entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Entidad Federativa y la Comunitaria, para tener como resultado un sistema integrado por normas escritas y no escritas. En las primeras, la función legislativa crea una jerarquía jurídica que garantiza los derechos político-electorales indígenas y en las segundas, son los "usos y costumbres" propios de cada comunidad, los que norman la conducta de los indígenas.

³ Artículos 35, Fracciones I, II y III y 41, Fracciones I, segundo párrafo, y IV, primer párrafo/ CPEUM.

⁴ Artículo 2, Apartado A, fracción I/ CPEUM.

⁵ Artículo 2, apartado A, fracción III/CEPUM.

En el diseño de las leyes en materia de igualdad, inclusión, integración y no discriminación

LIDERAZGO INDÍGENA PARA LA DEMOCRACIA



POR ALMA SOTO ZÁRRAGA

Históricamente el movimiento indígena mexicano ha pasado por varias etapas hasta obtener la fuerza y presencia, para hacer valer sus derechos y atender sus necesidades.

Entre los objetivos de los pueblos originarios al hacer presencia en la escena pública están el recibir el reconocimiento como integrantes de la sociedad, así como el respeto a su diversidad y autonomía, tanto como visibilizar las violaciones a sus derechos, como

ciudadanos reales y no de segunda o tercera clase.

Este movimiento ha implicado mucho más que protestas públicas, despliegues armados o asambleas locales, pero comenzó con esos métodos mucho antes de lograr la interlocución con

las autoridades civiles, ya sea desde el movimiento agrario y la lucha por la tierra, el derecho a la educación o el acceso a la justicia en lenguas indígenas, hasta el combate a los prejuicios, el clasismo, el racismo en todas las esferas políticas, para que en la redacción de las leyes realmente represente los intereses de las comunidades.

Muchos años pasaron para que la lucha por la defensa de sus derechos se llevara a las más altas tribunas con la intención de poner en papel los acuerdos y compromisos que el propio gobierno mexicano nunca antes había manifestado de manera impresa a esa parte de la sociedad.

Esto no habría sido posible sin el liderazgo participativo de los pueblos originarios en el diseño de las leyes en materia de igualdad, inclusión, integración y no discriminación, para identificar y plantear su problemática, la necesidad de impulsar iniciativas de ley, vigilar su redacción, mantener en la mesa de discusión los temas importantes para ellos y evitar que fueran desplazados de la agenda pública o tomados por bandera falsa por grupos de poder.

Una de las formas más notorias de defensa de los derechos humanos y colectivos de parte de los grupos históricamente marginados es la presión social que han hecho para modificar el marco normativo del Estado, desde la inclusión en los documentos básicos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cada Estado de la República.

Eso ha tenido un impacto importante

en la transformación de todas las entidades y participantes de la democracia, como las instituciones electorales, judiciales, entre otros.

ACUERDO INÉDITO

Tras su reforma de 1992, el artículo 4to constitucional afirmaba sobre los indígenas que "La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley".

Pero el levantamiento zapatista era más ambicioso que simplemente resolver los conflictos agrarios o promulgar un estatus de ciudadanía y concesión del estatuto de existencia. Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar se firmaron un 16 de febrero de 1996 en Chiapas entre representantes del Gobierno Federal y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el que, por primera vez, se reconocieron formalmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas dentro del marco legal nacional.

Estos acuerdos derivaron en la reforma al artículo 2do de la Constitución Política en 2001, con lo que, tras mucho regateo, un vergonzante clasismo de parte de la clase política y sobre todo, tiempo en el que no se quitó el dedo del renglón, se alcanzó este hito en materia de Derecho, debido a la insistencia de los propios actores y líderes indígenas para

que el gobierno asumiera en el papel la composición pluricultural de la Nación.

Dicho artículo incluye "el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad." Pero los acuerdos recogían otros temas sensibles como ampliar participación y representación políticas; garantizar acceso pleno a la justicia; promover sus manifestaciones culturales; asegurar educación y capacitación; garantizar la satisfacción de necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo; proteger a los indígenas migrantes (Moguel, 2004).

Para el Estado mexicano, el objetivo de esos acuerdos era "lograr la integración, desarrollo y homogeneización de esas comunidades" (Canal del Congreso, 2017), pero para los pueblos indígenas implicó, por principio, dejar atrás la movilización armada y la protesta, abrazar la vía pacífica y comenzar el diálogo para abrir la vía legislativa y transformadora, lo que implicó un gran cambio al interior de la organización ya presente, y supuso crear una nueva forma de lucha.

La convocatoria zapatista representaba la confrontación con el bloque hegemónico del poder político (neoliberal, tecnócrata, desarrollista, extractivista) y "convocaba a la sociedad mexicana a la refundación del Estado y consecuentemente al surgimiento de una nueva constitucionalidad". (Durand C., 1995)

Este acuerdo histórico fue alcanzado también gracias a la creación de inéditas comisiones de "asuntos indígenas" que tuvieron que abrirse al diálogo, escuchar, capacitarse y prepararse para diseñar las leyes y aprender del marco normativo internacional para adaptarlo a la realidad mexicana y sólo mediante el ensayo y error, la corrección y rectificación de los textos que consolidaran una ley verdaderamente incluyente.

Fueron los propios pueblos quienes trajeron a la mesa sus términos, sus definiciones, sus problemáticas y sus propuestas. Dicha firma propició la posibilidad de un nuevo sistema político y democrático más incluyente para

que los pueblos originarios pudieran participar en todas las esferas sociales con la dignidad y el reconocimiento de su ciudadanía.

DERECHOS POLÍTICOS

El compromiso del Estado no sólo supone la necesidad de contar con un marco jurídico que atienda a los compromisos internacionales y sobre todo que responda a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas, sino garantizar el acceso a la educación, la justicia y a la participación en sus lenguas.

Muchas han sido las campañas a favor de este tema, como la edición de cuadernillos didácticos de formación política en lenguas indígenas, o la presencia de traductores en los juicios.

Con la creación de entidades para gestionar estos temas, tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se ha buscado también crear espacios dignos para el debate y la construcción de diálogo, pero sus alcances y resultados no han trascendido el debate académico o transformado la realidad nacional de fondo, en cuanto a derechos políticos, sino más bien respecto de la realidad de sentirse atendidos o abandonados por el Estado.

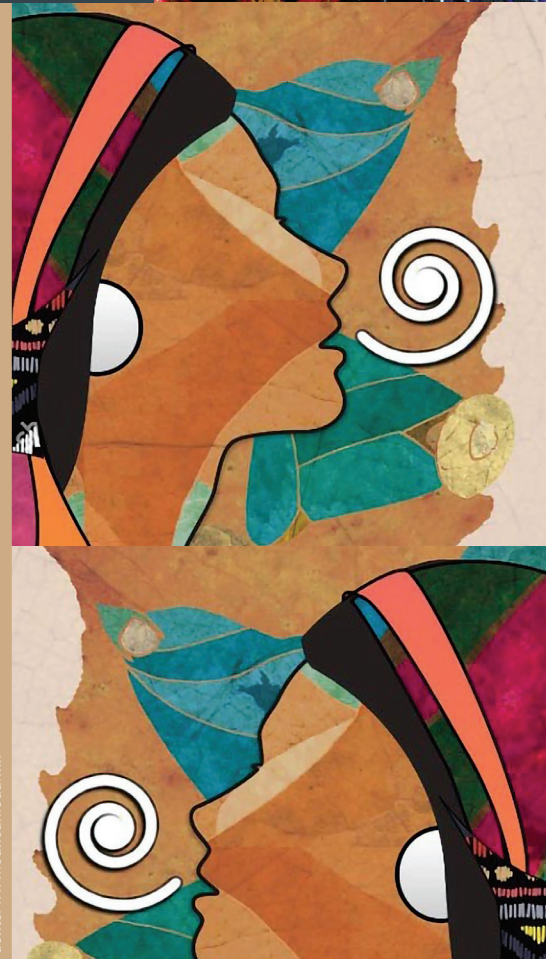
Han sido trascendentes, sin embargo, los esfuerzos por lograr un acceso a la justicia en lenguas indígenas, estimulando la formación de traductores que permitan el mejor desempeño del aparato del estado para la democracia.

SABERES Y DERECHOS

En la defensa de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos se han caminado muchas rutas. En este último rubro, por ejemplo, ha habido avances inéditos en la protección intelectual nacional e internacional de los derechos autorales, de creación colectiva y herencias culturales de los pueblos indígenas, con leyes como la que protege del plagio la obra artesanal y textil de bordadoras, diseñadoras de modas de la indumentaria tradicional e identitaria de los pueblos, llamada Ley Federal de



Fuente: www.desinformemos.org



Fuente: www.cancun.edu.mx



Fuente: www.imagedevetacruz.mx

Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas.

Muchas acciones se han emprendido alrededor de la creación de esta ley, detonada por el plagio del bordado de una blusa tradicional de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, como encuentros, pasarelas, ventas al público, mesas de debate, juntas de trabajo donde siempre ha sido importante escuchar la voz de las organizaciones de mujeres y hombres bordadores o artesanos.

Esta protección también ha significado al propio Estado Mexicano que haga una valoración del conocimiento ancestral, narrativo, discursivo y de saberes locales de cada pueblo o comunidad, así como del trabajo de las mujeres en la recuperación y defensa de las tradiciones, los rituales, y la vida cotidiana de los pueblos, lo que también construye justicia social, inclusión y visibilización de la riqueza cultural que aportan los pueblos.

La ley no establece cómo hacer los convenios comerciales donde se haga equiparación de cualquier elemento de cultura popular como obra de arte literaria o artística, sino que antepone un sistema de salvaguardia encabezado por la Secretaría de Cultura, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, de Educación Pública, las aduanas, y otras instancias involucradas.

Lo constitucional ha demorado en derivar en leyes reglamentarias o constituciones locales que sean más específicas con respecto a las particularidades, porque los pueblos indígenas tienen derechos que deben ser reconocidos, respetados y garantizados, no sólo promulgados.

Sería un gran avance del Estado, en materia de democracia, que lograra los objetivos de un nuevo pacto social y político y frenara al mismo tiempo la descomposición del sistema político que sigue siendo hostil o excluyente.

BIBLIOGRAFÍA:

- Commemoran firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, Canal del Congreso, 16 de febrero de 2017 consultado el 27 de octubre de 2022, en https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/9744/Commemoran_firma_de_los_Acuerdos_de_San_Andrs_Larrinzar
- Durand, C. (1995). "Nueva juridicidad agraria y la cuestión campesino indígena". En: D. Chacón Hernández et al (Coords), Efectos de las reformas al agro y los derechos de los pueblos indios en México (pp. 165-188). México: UNAM-a.
- Gutiérrez Hernández, Alejandro. 2019. Los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, Prolegómenos, vol. XXII, núm. 43, pp. 1937-1565. Consultado en <https://www.redalyc.org/journal/876/87662891010/html/> el 27 de octubre de 2022.
- Moguel, J. y San Juan C. (Coords.) (2004). Sistemas jurídicos de la pluriculturalidad en México (pp. 23-28). México: Universidad Indígena Intercultural de Michoacán.
- Rivera, Niza, 2022. Susana Harp ante la ley de protección al patrimonio, publicado en la revista Proceso el 25 de mayo de 2022. Retomado el 27 de octubre de 2022 desde <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/5/22/susana-harp-ante-la-ley-de-proteccion-del-patrimonio-286348.html>

morena

GUERRERO

Comité Ejecutivo Estatal

21 DE NOVIEMBRE DE 2022



EJEMPLAR GRATUITO

ID RNP: 201905011092086